

España y el rescate financiero. España en guerra

Domingo Marrero Urbín¹

Introducción

Cuando, alrededor del 10 de junio, recibí una invitación de Jorge Nóvoa para escribir unas páginas acerca de la situación económica, social y política de España “antes y después” del rescate financiero no supe qué contestarle: el rescate apenas era un esbozo y el artículo debía formar parte del número 18 de O Olho da História, que se publicaría en julio. Esperé casi una semana para responder y, tras meditarlo, acepté su ofrecimiento.

En primer lugar, dudé de mi capacidad y mis posibilidades para afrontar esa tarea, y lo sigo haciendo. En aquel momento las labores típicas del final del curso escolar me restaban tiempo y oportunidades para mantenerme informado sobre los acontecimientos cotidianos con el rigor necesario. Cuando ya estoy disfrutando de mis vacaciones, tampoco me resulta sencillo: ahora el tiempo apremia y los asuntos financieros, con su lenguaje especialmente esotérico, aunque no constituyen el centro del contenido de estas páginas, siempre me han resultado algo ininteligibles.

No obstante, la principal contrariedad (de la que tratará el primer epígrafe) es que el rescate financiero de España por la Unión Europea (UE) es todavía un proceso inconcluso y por tanto parcialmente desconocido, no sólo en su desarrollo, sino también en su diseño y en los acuerdos políticos que deben delinearlos definitivamente. Además, situado en cierta perspectiva histórica (aunque sea sólo el corto plazo), puede que no posea por sí mismo suficiente entidad para constituir un hito significativo, un detonante de cambios que posibiliten distinguir con claridad un antes y un después. El segundo apartado se ocupa de integrarlo en el proceso del que forma parte, que comenzó al menos en el año 2008 con el estallido del crack financiero en Estados Unidos.

Todo esto no impide, sin embargo, realizar en el siguiente epígrafe un análisis de la situación de España en la actualidad, que podría sintetizarse sin temor a exagerar de “guerra civil abierta”, aunque por fortuna incruenta. Finalmente, las conclusiones abordarán muy brevemente el posible impacto del rescate financiero en ese proceso histórico, que es bastante incierto. Pero esta “guerra civil”, como la de 1936, vuelve a situar a España en el foco de atención internacional, para unos en la lucha por el futuro del euro, y para otros en la pugna por la libertad de los pueblos: ¿cuál será su desenlace?

Un proceso abierto

Entre los inicios de junio y las tres primeras semanas de julio el rescate europeo se ha ido concretando en algunos aspectos, lo que ha podido reducir parcialmente la incertidumbre de los españoles. Hasta ahora se sabe que la UE prestará a la banca hasta 100.000 millones de euros a un interés variable, 30.000 de ellos antes de finalizar el mes de julio. Las instituciones financieras que necesiten recapitalizarse con esos fondos serán las

¹ Profesor de Educación Secundaria, IES Lila, Gran Canaria, España.

responsables de devolverlos. Así, hipotéticamente, la deuda privada no se convertirá en deuda soberana, como lo ha venido haciendo por el momento con las inyecciones de dinero público en determinados bancos y cajas de ahorro. A cambio el Eurogrupo impondrá duras condiciones al sector financiero español, pero también a la fiscalidad y al déficit del estado, aunque los objetivos sobre este último para los próximos años se han flexibilizado en algunas décimas.

No obstante, [el desarrollo de los acontecimientos](#) está muy lejos de inspirar confianza a la sociedad española, por dos motivos diferentes. Por un lado, debido a la actitud del propio gobierno, que ha oscilado constantemente entre la mentira y la desinformación. Y, por otro, porque el acuerdo aún no se ha firmado y la presión de los especuladores financieros sobre la deuda soberana española ha seguido aumentando hasta alcanzar registros históricos.

En el primer caso, todavía a finales de mayo Rajoy aseguraba que no se produciría rescate alguno a la banca española. Y el 7 de junio, tan sólo dos días antes de solicitarlo, el Partido Popular (PP) relevó al diputado José María Beneyto de su cargo (como coordinador de una subcomisión del Congreso sobre asuntos financieros) por haber sugerido que el rescate no era descartable. Pocas jornadas después el presidente español presentaría la decisión de la UE como un logro, en vez de lo que realmente fue, una imposición: a finales de junio el enjoe de destacados dirigentes europeos con Rajoy ya era público.

No puede decirse precisamente lo mismo sobre los aspectos más relevantes de la operación de crédito, ni de los recortes presupuestarios que el gobierno aprobó el viernes 13 de julio. Ese día varios ministros no fueron capaces de informar a los medios de comunicación acerca de los detalles de esos ajustes (los más duros de la democracia), especialmente en lo relativo al dinero que se ahorraría. Pero los inversores extranjeros sí los conocieron, [gracias a un documento en inglés](#) que pudieron descargar de una Web gubernamental. En cuanto a los pormenores del rescate, su aprobación por los parlamentos alemán, holandés y finlandés (el español ni lo ha debatido) ha permitido a los españoles [saber de la existencia de varios documentos fundamentales](#), porque el gobierno de Rajoy ni los ha publicado, ni los ha facilitado a los diputados y senadores españoles.

En el segundo caso, cuando estoy redactando estas líneas, la firma del acuerdo definitivo está prevista para el día 29 de julio. En los siete días que restan puede suceder cualquier cosa que transforme la situación sustancialmente, hasta el punto de invalidar una buena parte de este trabajo. Así, el 14 de julio el presidente del banco central alemán propuso que las condiciones para el rescate se ampliasen a toda la economía española, aumentando el grado de intervención, aunque no signifique una asimilación total a los casos de Grecia, Irlanda o Portugal. Cuatro jornadas después Ángela Merkel ponía de manifiesto la inseguridad que rodea al éxito de la operación financiera. Y hoy mismo los especuladores financieros y algunos "reputados economistas" recomiendan un rescate total, también del estado, colocando en la práctica a España bajo su tutela: la instauración definitiva de un régimen plutocrático.

Y si, en el mejor de los supuestos, el acuerdo no sufre cambios antes de su rúbrica, sus previsiones no incitan al optimismo. La reunión europea del 29 de junio fue crucial

porque Ángela Merkel cedió (aparentemente) en sus pretensiones de que el préstamo se hiciera directamente al estado español en vez de a la banca. Pero la canciller exigió una condición para ello: el Banco Central Europeo (BCE) deberá supervisar el proceso. El problema es que, por un lado, las necesidades de capitalización de la banca española no se conocerán hasta septiembre, y, por otro, el mecanismo de supervisión única del BCE no se hará efectivo hasta el verano de 2013 como muy pronto. Mientras tanto, seguramente el estado español será el garante del dinero que se vaya prestando, algo en lo que Alemania y Finlandia han insistido siempre. Así que el rescate total de España está servido.

Por otro lado, hay un segundo factor que ahonda en la sensación de incertidumbre y en las dificultades para redactar este artículo, aunque su impacto puede ser muy relativo: el verano. La solicitud española de rescate se produjo a las puertas de las largas vacaciones veraniegas, y todos los acontecimientos que ha desatado se están desarrollando en ellas. La constante presión especulativa sobre la deuda pública, las decisiones del gobierno para realizar nuevos y drásticos recortes presupuestarios (después de haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado ya muy restrictivos) y las reacciones sociales que han suscitado, como la marcha de los mineros hacia Madrid, las protestas diarias de los funcionarios, o las grandes manifestaciones del 19 de julio prueban que no siempre las calendas provocan un efecto dilatorio en el desarrollo de los hechos.

Pero también es cierto que las principales iniciativas de contestación a la política gubernamental, como una nueva huelga general o la "Marea Destituyente", se han anunciado para la vuelta de las vacaciones, en septiembre. La resaca del campeonato europeo de fútbol y la celebración de las Olimpiadas de Londres en agosto pueden acrecentar los efectos aletargantes del verano, aplazando hasta el otoño algunos acontecimientos significativos.

El rescate: un hito en su contexto

El rescate bancario podría convertirse en un hito histórico por sus consecuencias directas sobre la actividad económica, el empobrecimiento de la población y el aumento de la desigualdad social, o por la pérdida de soberanía que significa. Aunque lo será sobre todo si termina suscitando una reacción social capaz de provocar un vuelco en el proceso histórico del que forma parte. Es en ese contexto donde cobra sentido. Y ese mismo contexto es el que finalmente puede restarle protagonismo, porque implica otros acontecimientos posiblemente más relevantes que el mismo rescate.

Aunque en el Reino Unido y los Estados Unidos el auge del neoliberalismo comenzó antes que cayera el Muro de Berlín, hay que buscar las raíces de la intervención financiera de la UE en España en la victoria del capitalismo al final de la Guerra Fría. Desde entonces, los países occidentales han llevado a cabo una creciente desregulación y privatización de actividades y servicios públicos, a favor de las grandes corporaciones privadas, de acuerdo con la ideología neoliberal ya hegemónica. Lo que siguió después, el proceso de Globalización y de [entronización del capitalismo financiero en la cúspide de la economía capitalista mundializada](#), es bastante conocido y se halla en el origen de la crisis desatada en 2008 en los Estados Unidos, que se contagió inmediatamente al resto del mundo occidental. En

general, el crack financiero de ese año ha sido interpretado como una anomalía y como una crisis del sistema capitalista en su conjunto. Sin embargo, prefiero entenderlo como un síntoma de la vitalidad del capitalismo: [así tuvo la oportunidad de exponerlo](#) en la mesa sobre la crisis del IV Congreso de Historia a Debate, celebrado en diciembre de 2010. La periferia del sistema, "machacada" ininterrumpidamente cuando menos desde finales del siglo XIX, ya no era suficiente para los grandes capitalistas.

¿Por qué empezó la crisis en España? En parte porque la banca estadounidense, para obtener liquidez, había colocado una cantidad aún desconocida de hipotecas basura (convertidas en "activos tóxicos", ya que son difícilmente recuperables) en el mercado financiero internacional. Pero, ante todo, porque también España había desarrollado su propia burbuja inmobiliaria, que llegó a eclipsar al resto de Europa: es el modelo económico del "ladrillo y el pelotazo". No existe unanimidad acerca de cuándo comenzó la burbuja hispana, pero la entrada en vigor del euro supuso un hito muy destacado, favoreciendo el afloramiento de mucho dinero negro (ya fuera para construir como para comprar) y creando el espejismo de la subida permanente de los precios inmobiliarios.

Como había sucedido en los Estados Unidos, la banca privada y las cajas de ahorros respondieron multiplicando el crédito, pero también el riesgo, generando decenas de miles de hipotecas basura propias. De todos modos esto no hubiese sido posible sin la desregulación neoliberal. En 1995, cuando suscribí mi crédito hipotecario, la cuota mensual resultante no podía exceder un tercio de los ingresos familiares; en la década siguiente esa restricción había desaparecido.

Pero tampoco habría ocurrido sin el desarrollo de un fenómeno sociológico, vinculado a la falsa prosperidad del modelo económico del ladrillo, que no se cita en muchos análisis, porque hace referencia a las primeras víctimas de la burbuja. Centenares de miles de familias quisieron participar también en la bacanal especulativa, endeudándose más allá de sus necesidades y de sus posibilidades.

Ni, finalmente, la burbuja inmobiliaria habría crecido sin la corrupción política. La avaricia de suelo urbanizable de muchos promotores y constructores desató una oleada de corrupción, particularmente en las administraciones locales y autonómicas, responsables de la planificación y la gestión del suelo en España. Ya fuera para llenar los bolsillos de alcaldes y concejales, como las arcas de sus partidos, muchos promotores compraron la voluntad de centenares de políticos. El caso conocido más destacado es la [trama Gürtel](#), vinculada al PP.

Además, las cajas de ahorro, con su modelo de gestión (dirigidas por representantes de los agentes sociales y de los principales partidos políticos), fueron asimismo involucradas en la burbuja por esta vía. Y fueron empleadas de la misma manera para financiar costosísimas infraestructuras de toda clase (aeropuertos, centros culturales, deportivos...), casi siempre innecesarias, destinadas a favorecer por igual a determinadas empresas constructoras o promotoras y la imagen pública de muchos políticos: siempre a costa de las haciendas municipales y autonómicas.

Por supuesto, muchos analistas y organizaciones sociales advirtieron de los riesgos de esta burbuja antes que finalmente pinchara. Pero no interesó a nadie escuchar esas voces porque en el ámbito político todos obtenían algún rédito: incluso el gobierno central podía

presumir de la buena marcha de la economía española. Por eso, a finales de 2007 y a las puertas de unas elecciones generales, con el sector inmobiliario y la actividad económica en su conjunto dando muestras de agotamiento y caída, el presidente Zapatero faroleó asegurando que la economía española se encontraba entre las primeras del mundo.

Sin embargo, no serían la ceguera o los intereses electorales los que condujeron a España al crack financiero y al rescate. Lo han hecho una serie de decisiones, unas del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hasta noviembre de 2011, y otras del gobierno de Rajoy, desde esa fecha hasta la actualidad, sin que se pueda establecer diferencias entre las de unos y otros, porque todas han tenido el mismo objetivo: salvar a los bancos a cualquier precio.

Aunque la primera es muy anterior: la privatización de la banca pública entre 1993, bajo la presidencia de Felipe González, y 1998, con la de Aznar. Ese año se finalizó la privatización de Argentaria, que fue engullida por el BBV. Y fue un plato muy nutritivo: la demanda en bolsa de los títulos de Argentaria multiplicó en 18 veces a la oferta. Ahora quiénes ejecutaron ese proceso (o sus "sucesores") pretenden transformar Bankia (una entidad cadáver) en la "nueva banca pública española", una forma más de hacer que los ciudadanos costeen su "resurrección". Y quiénes proponen otras alternativas a los recortes y el rescate subrayan que un grupo bancario público fuerte (como lo fue Argentaria) habría podido detener la crisis financiera.

Así que, cuando a finales de 2009 el sistema financiero español ya hacía aguas, el presidente Zapatero adoptó un conjunto de medidas que Rajoy ha continuado ejecutando hasta ahora. Las más importantes, porque han "hecho necesario" el rescate de la UE, fueron dos. La primera, comprometer y colocar dinero público, ya fuera avalando operaciones de financiación como inyectando fondos, sobre todo comprando participaciones preferentes. La segunda, reestructurar el sistema financiero forzando operaciones de fusión, especialmente entre diversas cajas de ahorro que, además, debían transformarse en bancos.

Pero el maquillaje sistemático de las cuentas de muchas entidades, que hicieron sus responsables, las convirtió en un pozo sin fondo que ya se ha tragado más de 150.000 millones de euros de todos los españoles. Y las operaciones de fusión sólo han servido en la mayoría de los casos para aumentar exponencialmente el problema. El caso paradigmático, que recae casi completamente en la órbita de la responsabilidad del PP, es el de [Bankia](#). Este "nuevo banco", actualmente nacionalizado, ha consumido ya más de 23.000 millones de euros y ha sido uno de principales detonantes del rescate.

Una guerra abierta

España se encuentra en un estado de guerra civil. Es un conflicto no armado e incruento que, sin embargo, está causando mucho dolor e incertidumbre por medio de la violencia estructural y en ocasiones policial. Y, como todas las guerras, amenaza con hipotecar el futuro de varias generaciones.

Las partes beligerantes están bien definidas. A un lado se halla el gran capital financiero internacional y nacional, que ha tomado las principales instituciones del estado y las está empleando a su favor con total impunidad, [construyendo una dictadura a su medida](#):

salvo Izquierda Unida (IU) y algún otro partido minoritario, todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso y en el Senado están al servicio de esos intereses. Como también lo están los grandes grupos de información y comunicación, prensa y audiovisual. Al otro lado se encuentra la mayor parte de la sociedad española, incluso quiénes hasta ahora no se han movilizado, cuyo volumen disminuye a medida que el conflicto se agudiza: una asociación de militares ya ha hecho público su malestar con el gobierno.

Es una guerra de agresión económica y política que, siendo realistas, van ganando los agresores: el capitalismo financiero y su dócil clase política. No existe una fecha de inicio precisa, pero una serie de acontecimientos, siempre decisiones políticas, han conducido a su estallido.

El camino hacia la guerra

Las enormes inyecciones de dinero público en el sector financiero no han impedido el rescate bancario, ni quién sabe si el total. Aunque, junto a la crisis, han vaciado las arcas del estado y han disparado el déficit público, generando una espiral en la que el estado se ve obligado a recurrir a un mayor endeudamiento para financiarse, pero a un coste creciente. Esto aumenta todavía más su deuda y, por tanto, la proporción de los presupuestos públicos destinada a afrontarla.

El problema es que desde finales de 2009 hasta el presente más inmediato los gobiernos de Zapatero y de Rajoy han actuado fiscalmente como si en España no hubiese grandes empresas ni grandes fortunas. Todo, absolutamente todo el esfuerzo y el sufrimiento para afrontar esta situación se ha impuesto a las clases populares y medias. La única excepción relativa, el "Plan E" del gobierno de Zapatero (aprobado en marzo de 2010) para estimular la actividad económica, calificable como "burdamente keynesiano", fue un fracaso.

Antes, en septiembre de 2009, el gobierno del PSOE ejecutó su primer acto de hostilidad, si bien podría considerarse de baja intensidad: una tímida subida de varios tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y algunas modificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como la eliminación de la deducción a todos los contribuyentes de 400 euros o el aumento de la imposición sobre los intereses de los ahorros. Un año después, el mismo gobierno llevó a cabo una reforma de la legislación laboral, que se tradujo básicamente en un abaratamiento del despido, aunque incluyó otras medidas. En poco tiempo, en enero de 2011, creció la intensidad de la agresión, con una reforma de las pensiones que prolongó la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Y para culminar su mandato, Zapatero dio su último paso en la escalada de hostilidades en agosto de 2011 (en plenas vacaciones), con una modificación constitucional que puso techo al déficit presupuestario del estado, hipotecando así las políticas sociales. Para ello contó con el apoyo del PP, si bien varios de los partidos que se opusieron lo hicieron más por las formas que por el fondo del asunto.

En noviembre de 2011 el PP ganó las elecciones generales más dramáticas de la actual democracia española, pese a lo cual un 30% del electorado no participó en ellas. Ya en enero, Rajoy congeló el desarrollo de la ley de dependencia, que protege a las personas

dependientes y a sus familiares. En febrero de 2012 atacó frontalmente a la clase trabajadora, aprobando una nueva reforma laboral que facilita y abarata aún más el despido y que promueve la precariedad del trabajo. Y ese mismo mes anunció drásticos recortes en el sector público, particularmente en la sanidad y la educación, los buques insignia del estado del bienestar. Dos meses más tarde dio a conocer nuevos recortes adicionales, así como el co-pago farmacéutico, que afecta especialmente a la población más desprotegida, los jubilados y pensionistas cuya salud suele ser más débil y su nivel adquisitivo más bajo. Y finalmente, en julio, el gobierno del PP ha adoptado nuevas medidas que han extendido y amplificado la indignación por todo el país: severos recortes en el subsidio por desempleo, subida draconiana de muchos tipos del IVA, y suspensión de la paga extraordinaria de diciembre de los funcionarios públicos, que ya venían sufriendo primero la congelación y después la reducción de sus salarios.

El impacto de la agresión

Como habían advertido todos los expertos, y también el gobierno federal de los Estados Unidos, la política de recortes del gasto público y de castigo a las clases populares, propiciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por Alemania en el contexto de la UE, ha acentuado la crisis. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que, tras una leve recuperación entre mediados de 2009 y comienzos de 2011 (aunque casi siempre con valores negativos), el Producto Interior Bruto (PIB) [ha continuado cayendo en el primer trimestre de 2012](#) (un 0,3%), acumulando un descenso interanual del 0,4%: España sigue en recesión. A pesar del buen comportamiento de las exportaciones, pese a caer levemente, la contracción drástica de la demanda interna es la principal responsable. Las ventas de vehículos a particulares (en el segundo fabricante de Europa) siguen disminuyendo ininterrumpidamente después de casi dos años. Y la venta de viviendas también continúa bajando, aunque no como en 2008 cuando el mercado inmobiliario se desplomó literalmente.

El mes de julio comenzó con una buena noticia: el desempleo había descendido en junio. Pero fue un descenso estacional, como el de mayo, provocado por el incremento de la actividad turística en verano. Y, en cualquier caso, no puede compensar los [datos del segundo trimestre](#) en su conjunto (ni de todo el semestre) que proporciona el INE: el número de parados en España sobrepasa ya holgadamente los 5 millones y medio de personas, un 24,6% de la población activa. Además, el sufrimiento y la incertidumbre aumentan, en la medida que más de 1.700.000 hogares tienen a todos sus miembros en desempleo. Aunque quizás lo más preocupante es su extraordinario desequilibrio territorial: la tasa de paro andaluza (33,9%) más que duplica la del País Vasco, con un 14,5%. El desempleo se está cebando precisamente en las comunidades autónomas más pobres, como Extremadura, donde alcanza el 33,38% o Canarias, que padece un 33,14%.

Efectivamente, [según Cáritas](#), España ya es el noveno país más pobre de Europa y algunas de sus comunidades, como Extremadura, superan a Rumania en el riesgo de pobreza y exclusión social. En un país con un parque de viviendas vacías cercano a los 3,5 millones, Cáritas asegura que entre 15.000 y 30.000 personas no tienen techo. Y la

Plataforma de Afectados por la Hipoteca añade que más de 400.000 familias han sido desahuciadas desde 2008 hasta la actualidad.

Pero la pobreza no ha caído sobre todos los españoles por igual. No es un dato nuevo, porque España es uno de socios más desiguales de la UE. Incluso durante los ciclos de bonanza económica produce desigualdad social. Pero la crisis y los recortes iniciados por Zapatero y continuados por Rajoy han hecho aumentar las diferencias entre los más ricos y los más pobres. El Colectivo Ioé, en su informe [Crece la desigualdad en España](#), advierte que la aportación de las rentas empresariales al PIB ha superado, por primera vez en la historia, a la contribución de las rentas salariales. Y la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres ha crecido, desde un coeficiente de 31,2 en 2007 al 33,9 en 2010.

Sin embargo, durante este proceso los gobiernos españoles apenas si han importunado a los más ricos. El déficit público "ha obligado" a restablecer el Impuesto sobre Patrimonio (que había sido eliminado del sistema tributario) pero sólo transitoriamente, para los ejercicios de 2011 y 2012. Cuando comience el año 2013 la obligación de contribuir por ese concepto habrá desaparecido nuevamente. Rajoy también ha modificado el IRPF, subiendo el impuesto a todos los tramos de ingresos, especialmente a las rentas más altas. Pero los técnicos del Ministerio de Hacienda aseguran que las clases medias y los asalariados en su conjunto serán los más perjudicados.

No obstante, lo que mejor evidencia la subordinación de los gobiernos a los privilegiados es el tratamiento que están dando a los mayores defraudadores fiscales, a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Estos delincuentes evaden cada año una cantidad de riqueza suficiente para afrontar las dificultades financieras del estado con cierta comodidad: [42.710 millones de euros en 2010](#), como señala el sindicato de los técnicos de hacienda. Sin embargo, lejos de perseguirlos como están haciendo actualmente los gobiernos francés y alemán, Rajoy ha decretado una amnistía fiscal para ellos, que no sólo puede ser inconstitucional sino que además está dando unos resultados irrisorios en su pretensión de hacer aflorar una ínfima proporción de los recursos defraudados.

Desde 2008 los gobiernos vienen repitiendo insistentemente que "no se puede hacer otra cosa". Sin duda es una burda mentira que se cree cada vez menos gente. Las alternativas son muchas y muy diversas, pese al silencio y el ostracismo al que están sometidas por los grandes medios de comunicación. Para empezar está la experiencia de Islandia, sobre la que algunos medios, como El País, a veces se ven obligados a reconocer la verdad: ["El enfoque de Islandia para hacer frente a la crisis se ha basado en imponer las necesidades de su población frente a las de los mercados a cada paso"](#). Pero también hay alternativas sin atravesar las fronteras de España, como las que propusieron el año pasado [Vicenc Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón](#). Incluso el ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, las podría encontrar sin salir siquiera del edificio de su ministerio: son las que [han presentado sus propios técnicos hace pocos días](#) para ingresar nada menos que 63.800 millones de euros cada año. Los recortes y el rescate son absolutamente innecesarios.

Las respuestas populares

Durante los tres primeros años de la crisis, hasta 2011, la sociedad española pareció no reaccionar frente a estas agresiones, mientras observaba cómo los directivos de las entidades financieras responsables del crack empezaban a abandonar sus puestos cobrando indemnizaciones millonarias. No obstante, la reforma laboral de septiembre de 2010 dio lugar al inicio de las respuestas populares, con una huelga general convocada por los sindicatos para el día 29 del mismo mes. La valoración de sus resultados fue muy desigual, desde las centrales sindicales, que la consideraron un éxito, hasta el PP (en la oposición) que la calificó de fracaso.

En realidad muchos españoles estaban incubando un malestar que eclosionó en mayo de 2011, poco después de la reforma de las pensiones impuesta por el gobierno de Zapatero y poco antes de su acto casi póstumo, la modificación constitucional de agosto: había nacido el [movimiento de los Indignados](#). Frente a la estrategia tradicional de la huelga y los no menos vetustos sindicatos, el Movimiento 15-M, nace de la convocatoria de muchas organizaciones y movimientos sociales (el más destacado fue Democracia Real Ya) para llevar a cabo una marcha pacífica de protesta generalizada en muchas ciudades españolas. Bajo el lema de "no somos mercancías en manos de políticos y banqueros", había nacido un sujeto histórico nuevo y distinto, que emplea Internet y las redes sociales masivamente para organizarse y actuar. Pero lo que sorprendió a todos (los demás españoles, la clase política, y el resto del mundo) fue que las manifestaciones acabaron en la mayoría de los casos con la organización de acampadas: las más conocidas en la Puerta del Sol de Madrid y en la Plaza de Catalunya de Barcelona.

Esta movilización ciudadana tuvo sus antecedentes inmediatos en las protestas populares de varios países del norte de África y del mundo árabe que se habían venido desarrollando desde comienzos de año contra la corrupción y exigiendo democracia. Y, desde luego, también contó con un trampolín intelectual, en el *Indignaos* de Stéphane Hessel. Pero su originalidad fue que las acampadas se convirtieron en asambleas permanentes donde bullían las iniciativas y las propuestas de acción, siempre practicando la democracia participativa y, sobre todo, la no violencia. Hasta su desalojo final, entre julio y agosto, el movimiento pudo madurar y diseñar todo un programa de actuación, que en muchos casos se está ejecutando.

El 15-M fue tratado por muchos partidos políticos y medios de comunicación españoles con desprecio o indiferencia, y el desalojo de las últimas plazas que resistían quiso ser interpretado como su final. Pero el apoyo popular que ha suscitado, una amplia corriente de simpatía entre las tres cuartas partes de los españoles, y su actividad continuada con nuevas protestas y movilizaciones (como la del 15 de octubre), evitando desahucios, organizando asambleas de barrios, presentando una iniciativa legislativa para la dación en pago, o una querrela contra Rodrigo Rato y todo el consejo de administración de Bankia, lo han hecho consolidarse y expandirse según varios expertos.

Aunque sus logros no acaban ahí. Como también sucedió en el mundo árabe, el 15-M, o la "Spanish revolution", atravesó las fronteras españolas y se extendió por medio mundo, donde no sólo consiguió apoyos y un tratamiento más serio por los medios de

comunicación, sino que ha inspirado otras iniciativas, como el movimiento Occupy Wall Street, que se ha organizado en 52 ciudades de los Estados Unidos. Por eso la expectación fue inmensa cuando, el pasado 12 de mayo, el 15-M convocó nuevas manifestaciones en toda España y muchos lugares del mundo para celebrar su primer aniversario. Y, aunque la respuesta social no fue igual en todos lados, nadie se atrevió a negar que sigue muy vivo. Lo suficiente para proponerse abrir tres oficinas de un nuevo "banco indignado" en 2013, fortaleciendo y redimensionando una cooperativa de crédito creada en 1996.

Desde el nacimiento del 15-M todas las agresiones contra los españoles han tenido una respuesta en las calles, como la reforma constitucional de agosto de 2011. Pese a ser convocadas el último domingo de ese mismo mes, las manifestaciones de protesta contaron con decenas de miles de participantes en todo el país. Pero la llegada al poder del PP tras las elecciones generales de noviembre ha supuesto una vuelta de tuerca en las políticas antisociales y, en consecuencia, en la indignación y las protestas populares. Nadie como Rajoy ha sabido sembrar tan bien el descontento en toda la historia reciente de España.

El mes de febrero fue clave. La segunda reforma laboral en cinco meses provocó el llamamiento a una nueva huelga general, que se llevó a cabo el 29 de marzo. Al igual que la celebrada en septiembre contra el PSOE por el mismo motivo, su éxito ha sido muy discutido: la presión de los empresarios y el gobierno sobre los trabajadores para frenarla fue muy intensa. Pero las manifestaciones de esa misma tarde, cuando la mayoría había terminado su jornada laboral, fueron impresionantes, poniendo de manifiesto un rechazo masivo a las medidas gubernamentales. Al mismo tiempo, los recortes en el sector público, especialmente en sanidad y educación, provocaron nuevas protestas callejeras a lo largo del país, protagonizadas por personal sanitario, docentes y estudiantes, que se prolongaron durante días. A ello contribuyó la actuación policial en Valencia, donde los antidisturbios disolvieron violentamente una concentración pacífica de estudiantes de secundaria. Con su extraña habilidad, el gobierno consiguió hacer renacer el movimiento estudiantil, que se ha ido organizando y convocando todo tipo de actos de protesta desde ese día. Y amenaza con continuar en el próximo septiembre, aunque su desarrollo y "belicoidad" son bastante desiguales territorialmente.

Mucho antes, a partir de septiembre, el profesorado no universitario de la Comunidad de Madrid había llevado a cabo multitud de manifestaciones, y diez días de huelga hasta noviembre, a causa de las medidas adoptadas a comienzo de curso por el gobierno autónomo: fue la "Marea Verde", que obtuvo unos pocos éxitos parciales. Igualmente dirigido por el PP, su presidenta, Esperanza Aguirre, quiso adelantar las medidas que Rajoy guardaba en su cartera.

Las nuevas restricciones del presupuesto estatal anunciadas en abril y aprobadas en mayo consiguieron extender la Marea Verde a todo el estado, y la convocatoria de la primera huelga general de toda la enseñanza pública en la historia de España. Nuevamente, este paro tuvo un seguimiento muy desigual, volviendo a poner en tela de juicio el papel de los sindicatos en todo este proceso: en algunas comunidades recomendaron no hacer huelga "porque no se daban las circunstancias adecuadas". Pero también desataron la furia de los mineros, cuya actividad depende en buena medida de los subsidios estatales. Tras cuatro

días de paro a finales de mayo y del fracaso de las conversaciones con el Ministerio de Industria, fueron a una huelga general indefinida que se ha prolongado más de 60 días, en la que se han producido multitud de enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios y una marcha hacia Madrid en la que contaron con el apoyo y la solidaridad popular. Sin embargo, mientras escribo estas líneas los problemas económicos les han obligado a volver a sus puestos de trabajo, al menos hasta el otoño.

Finalmente, las medidas anunciadas en julio, contra todos los consumidores, contra los desempleados y contra los funcionarios han desatado una nueva oleada de movilizaciones que todavía prosiguen: cada día miles de funcionarios realizan protestas en muchas ciudades españolas. No obstante, el pasado jueves 19 se celebraron decenas de manifestaciones en todo el país, alcanzando algunas de ellas cifras récord de participación. Y extendiéndose a colectivos que hasta ahora habían permanecido en silencio. La mañana del 19 aparecieron 97 furgones policiales (de los que emplean los antidisturbios) con varias ruedas pinchadas en unas instalaciones del Ministerio del Interior de Madrid: un acto evidente de auto-sabotaje.

Sin duda todo esto dibuja un escenario de creciente descontento y movilización social. La indignación aumenta y se extiende con cada acto de hostilidad del gobierno contra el pueblo. No es extraño, pues, que el [Anuario Estadístico del Ministerio del Interior](#) no publique desde 2009 las cifras de asistentes a manifestaciones (que estaban aumentando espectacularmente), ni de protestas espontáneas desde 2010.

Sin embargo, este relato también muestra una serie de movilizaciones e iniciativas que se solapan y agolpan unas sobre otras. Es cierto que el 15-M, el único movimiento social realmente organizado, ha dado su apoyo a casi todas ellas, pero no terminan de cuajar y articularse en una sola, pese a luchar contra el mismo enemigo y por las mismas razones. De hecho, los Indignados desconfían profundamente de los sindicatos (y no les faltan motivos), y algunos sindicalistas radicales y los antisistema desconfían del 15-M: “menos bazucadas y más barricadas”, dicen. Ésta es por el momento su principal debilidad.

Una dictadura en ciernes contra una nueva democracia en gestación

Esta indudable situación de agitación social, que un periódico conservador de ámbito regional calificó de “al borde de la insumisión”, contrasta con la aparente paz en que se desarrolla la vida política oficial. Ese cierto sosiego resulta incomprensible cuando la España democrática atraviesa su peor crisis, que la ha llevado a hipotecar el bienestar de varias generaciones a través del rescate financiero. Y sobre todo porque la indignación ciudadana es netamente política y sus reivindicaciones son de la misma naturaleza: cuestionan el estado mismo.

No es casual que la plataforma “nodriza” del 15-M se denomine “Democracia Real Ya”, y que uno de los lemas preferidos de los indignados en sus protestas sea “que no, que no, que no nos representan”. Ni tampoco lo es que su principal característica sea la práctica sistemática de la democracia horizontal. Excepto IU y algunos partidos muy minoritarios, las demás fuerzas políticas con representación parlamentaria forman parte del sistema que le ha declarado la guerra a la ciudadanía: incluso los grandes sindicatos tenían representantes en los consejos de administración de las cajas que se hundieron o lo están haciendo.

Ciertamente muchos partidos, hasta el PSOE, se han opuesto a las últimas medidas de Rajoy. Pero su actitud frente al rescate es definitiva y definitiva: ha sido necesario.

España y los españoles ya se encuentran en manos de los especuladores financieros internacionales. Eso es suficiente para considerar la democracia finiquitada. Por eso las modificaciones del Código Penal que Rajoy pretende hacer para considerar miembros de una organización criminal a quienes actúen violentamente en protestas callejeras, para perseguir a los que convoquen por medio de Internet concentraciones públicas donde se realicen actos violentos, o para tratar la resistencia pacífica como desobediencia a la autoridad son muy ilustrativas, pero casi anecdóticas.

La corrupción política destruye la democracia porque el afán de lucro (el motor del capitalismo) se convierte veladamente en el principio rector de la actividad y las decisiones políticas. Con el rescate, la avaricia sin fin de "los mercados" dirige España abiertamente. Así pues, no es tampoco extraño que el PP, "llamado" a consumir la destrucción de la democracia, esté asediado por numerosos casos de corrupción que amenazan con meter entre rejas a muchos de sus dirigentes autonómicos y estatales: Gürtel, Brugal... El PSOE, cómplice de la dictadura en ciernes, también los cuenta por decenas. Y prácticamente todos los partidos que detentan el poder político, aunque sea autonómico o local, como Convergencia i Unió (CiU), o Coalición Canaria (CC).

Por ello, el ámbito judicial se ha convertido en otro de los campos de batalla, donde las escaramuzas se suceden constantemente. Y no sólo por las demandas presentadas contra el consejo de administración de Bankia, o contra determinadas entidades que "colocaron" acciones preferentes a clientes analfabetos, convirtiendo en humo sus ahorros de toda una vida.

Cuando el juez Garzón fue apartado de la carrera judicial en febrero pasado por unas supuestas escuchas ilegales en el caso Gürtel, se sucedieron numerosas protestas contra la decisión del Tribunal Supremo (TS), especialmente en Madrid. Pero la batalla ha continuado: en junio el mismo tribunal rechazó una denuncia por estafa contra Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentada por una asociación de abogados. No fue juzgado porque su conducta (pagar vacaciones privadas con fondos públicos) no es, al parecer, constitutiva de delito, aunque es claramente inmoral. Así que antes de finalizar el mes presentó su dimisión: la presión popular y de una parte de la judicatura lo forzó a ello.

Las actuaciones más que discutibles del poder judicial, que minan su credibilidad social, no terminan con el caso de Garzón. La negativa sistemática de los jueces a llamar a declarar (cuando menos) a la infanta Elena, sobre su papel en el caso de corrupción protagonizado por su esposo (Iñaki Urdangarin), que está inculpado desde comienzos de 2012, empieza a ser discutida hasta en los medios de comunicación. Especialmente porque existen suficientes evidencias de la participación activa de la hija de don Juan Carlos en los hechos.

Ni tampoco acaban ahí los conflictos que la familia real ha protagonizado durante este año. En abril el nieto mayor del Rey se disparó en un pie mientras manejaba una escopeta cuyo uso está prohibido a los menores de su edad. Aunque poco después la jueza

desestimó la causa contra su padre, la imagen de negligencia que se ha proyectado es indiscutible. Cuando pocos días después su propio abuelo se rompió una cadera mientras cazaba elefantes en Botsuana –en plena crisis-, la situación se volvió insostenible, incluso para la reina, que apenas le dedicó unos minutos durante su primera visita al hospital. Nunca antes en la historia de España un rey, públicamente, había pedido disculpas a su pueblo.

La Corona ha sido tradicionalmente la institución mejor valorada por los españoles en las encuestas de opinión, pero su imagen no está saliendo bien parada de la cadena de acontecimientos en que se ha visto envuelta, o que ha protagonizado. Pero lo sucedido es bastante coherente con el descrédito general del actual régimen político español. Y también con el “plato fuerte” de la vuelta de las vacaciones, la iniciativa “Ocupa el Congreso”, cuyo objetivo es disolver pacíficamente las Cortes e iniciar un proceso constituyente de un nuevo estado, de una democracia real. Hasta ahora, el volumen de información sobre este contraataque popular contra la plutocracia es bastante escaso: ya está siendo investigado por las fuerzas de seguridad. No obstante, parece estar respaldado por muchos grupos y movimientos sociales. La guerra continúa.

Conclusiones

El rescate bancario aún no se ha efectuado, de modo que resulta imposible predecir qué será de España una vez que se produzca. Quizás el principal factor sea si se convertirá o no en deuda soberana, aunque en cualquier caso sus consecuencias siempre serán negativas, sobre todo cuando se acepta la premisa de que “no hay rescate bueno”. No obstante, las consecuencias del proceso premeditado que lo “ha hecho necesario” son muy conocidas. Ha supuesto la apertura de un conflicto que podría acabar con el actual régimen plutocrático y el nacimiento de una nueva democracia, o con el sometimiento más infame del pueblo español.

En ese sentido, este conflicto recuerda al que se desarrolló entre 1936 y 1939. Aunque “actualizadas” y redimensionadas las fuerzas sociales que se oponen son en esencia las mismas, al margen de que, en el ámbito cada vez más ambiguo de las siglas políticas, algunos protagonistas hayan cambiado de bando. Y el contenido del conflicto, lo que se juegan en él los españoles, es también muy similar: la civilización o la barbarie. Pero, al igual que hace 76 años, la ciudadanía española más activa está fragmentada: en aquella ocasión fue un factor de su derrota.

También es muy parecido el contexto internacional en que se está desarrollando el conflicto de España. Por un lado, porque la Segunda República no fue la primera víctima europea del fascismo, ni la España de 2012 la primera de los “mercados”. Por otro, porque el entorno internacional está pesando decididamente en la inclinación de la balanza. Resulta difícil, aunque no imposible, imaginar una victoria del 99% (así rezan miles de pancartas) sin la articulación de un movimiento global, aunque sólo sea en el marco europeo, que haga frente a la tiranía de los especuladores financieros. Y eso tampoco parece sencillo; hasta ahora no ha sucedido. Aunque las espadas siguen en alto, la situación no es precisamente esperanzadora.